



Boletín Americanista

Universidad de Barcelona
Facultad de Geografía e Historia
Sección de Historia de América

Año LVI Barcelona 2006

56

BOLETÍN AMERICANISTA 56

Publicacions i Edicions



UNIVERSITAT DE BARCELONA



ÍNDICE

ARTÍCULOS

Antonio Acosta. <i>América Central: de los proyectos revolucionarios al neoliberalismo dependiente (1960-2004)</i>	7
María José Borrero Barrera. <i>En torno al indígena americano y la codificación de su lengua.</i>	35
Rafael Cala Carvajal. <i>Cartas y documentación de Zoilo Gallart Balcells. Ms. Ultramar/13", testimonio epistolar de la Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898).</i>	49
José Daniel Cesano. <i>El sistema penal durante el primer peronismo (1946-1955): a propósito de ciertas interpretaciones.</i>	69
María-Dolores Fuentes Bajo. <i>Realidad colonial y luchas de poder. Gibraltar, Venezuela, 1749-1752.</i>	89
Pilar García Jordán. <i>La Cueva, la Liga y el escándalo del Putumayo. A propósito de redes sociales, económicas y políticas en la Iquitos de inicios del siglo XX.</i>	103
Lola G. Luna. <i>Abordajes de la historia de las mujeres en la enseñanza de la Historia de América Latina, siglo XX.</i>	119
Silvina Jensen. <i>Ser argentino en Cataluña. Los exiliados de la dictadura militar y la experiencia del pasaje</i>	133
María Jesús Jiménez Díaz. <i>Premisas para el estudio de una colección textil: el caso de los Tejidos Prehispánicos y Coloniales del Museo de América de Madrid</i> . . .	159
Michèle Olsina. <i>Las moradas de los Americanos de Sitges: Un ejemplo de arquitectura modernista en el contexto de la Cataluña de Gaudí</i>	175
Ricardo Piqueras. <i>Los perros de la guerra o el "canibalismo canino" en la conquista</i>	186
Eulalia Ribera Carbó. <i>Imagen urbana, nación e identidad. Una historia de cambios y permanencias en el siglo XIX mexicano</i>	203
Meritxell Tous. <i>Aproximación a la representación política de la Alcaldía Mayor de Sonsonate durante el siglo XVI: caciques y cabildos indígenas.</i>	217

RESEÑAS

- CAGIAO, Pilar (coord.).** *Cien anos da Biblioteca América (1904-2004)*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2004. 231
- FUNARI, Pedro Pablo Funari y VIERA DE CARVALHO, Alina.** *Palmares ontem e hoje*. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 233
- LEÓN, Magdalena y RODRÍGUEZ SÁENZ, Eugenia (ed).** *¿Ruptura de la inequidad? Propiedad y género en la América Latina del siglo XIX*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2005. 234
- NARANJO OROVIO, Consuelo; LUQUE, María Dolores y PUIG-SAMPER, Miguel Ángel (ed.).** *Los lazos de la cultura: el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939*. Madrid/Río Piedras: CSIC, Instituto de Historia, Departamento de Historia)/Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 2002. 237
- PETIT, Pere.** *Chão de Promesas: elites políticas e transformações econômicas no estado do Pará pós-1964*. Bélem, editorial Paka-Tatu, 2003. 238

AMÉRICA CENTRAL: DE LOS PROYECTOS REVOLUCIONARIOS AL NEOLIBERALISMO DEPENDIENTE (1960–2004)¹

Antonio Acosta
Universidad de Sevilla

Introducción

A pesar de la brevedad de estas páginas, su objetivo es tratar de comprender algunos de los rasgos principales de la evolución de América Central en los últimos 50 años y enmarcarla en el proceso que ha seguido la historia mundial en estas décadas recientes. En otros términos lo que se trata de exponer son algunas de las claves que pueden ayudar a entender por qué varios millones de indígenas, campesinos y trabajadores centroamericanos, en la actual versión del capitalismo globalizado, continúan teniendo que vender su fuerza de trabajo a unos precios tan bajos que dan como consecuencia que su alimentación, vivienda, salud, enseñanza, etc. sean de las más precarias que existen hoy día en el planeta, en tanto que amplios sectores de quienes se la compran ostentan niveles de vida comparables con los más altos de los de países avanzados.²

El período considerado es dividido en tres etapas que no pueden ser exactamente aplicables a toda la región, dadas las importantes diferencias que existen entre los países del área así como los profundos contrastes que han marcado su respectiva historia reciente. Con todo, aunque advertiré oportunamente las limitaciones de esta división, creo que será de cierta utilidad para comprender el objetivo expresado. Las tres partes, además de esta breve Introducción, son: (1) Los proyectos revolucionarios, (2) La guerra y la derrota de los intentos de cambio, y (3) El neoliberalismo dependiente. Es importante advertir que ciertos matices políticos o económicos de importancia tendrán que ser sólo apuntados debido a las limitaciones de extensión de un artículo, aunque se procurará que la falta de tratamiento más extenso no afecte a la base de la argumentación.

1. Este trabajo se inscribe en el proyecto I+D, BHA2003-03628.

2. Ver Informe de Desarrollo Humano del PNUD, 2004.

Conviene señalar que, pese a los profundos cambios de estas dos últimas décadas, la vida de la región está aún hoy marcada por las consecuencias de la división geo-estratégica que hicieron los Estados Unidos y de la función que le asignaron desde fines del siglo XIX. Esta exposición arranca de los intentos de crecientes sectores sociales –sobre todo en cuatro países de la región: Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras– por cambiar, a partir de la II Guerra Mundial, las dinámicas económicas y políticas internas heredadas como mínimo desde el siglo XIX. Tras la contienda mundial, las clases dominantes de la región aprovecharon la nueva expansión del capitalismo norteamericano y el carácter estratégico que el área seguía teniendo para los gobiernos de los Estados Unidos en la nueva Guerra Fría, para prolongar y acentuar su posición dominante a base de intensificar su explotación económica en el seno de sus sociedades. Para ello, con el apoyo decidido de los Estados Unidos, prolongaron la violación de los derechos humanos y políticos, en línea con lo que ya venía ocurriendo desde hacía décadas. Esta perpetuación, y acentuación, de las desigualdades económicas y sociales significó en la década de 1950 un nuevo fraude a las expectativas de cambio social que ya se habían frustrado por primera vez a comienzos del siglo XX y, posteriormente, durante la crisis de los años 1930 con las dictaduras de J. Ubico, A. Somoza, T. Carías y M. Hernández Martínez. En 1945, el triunfo de los aliados parecía anunciar la llegada a América Latina –aun dentro del sistema capitalista– de nuevas formas libres y democráticas que los propios Estados Unidos deberían patrocinar en coherencia con el discurso dominante de la II Guerra, que había sido el de la lucha por la libertad y en contra de los totalitarismos (LaFeber, 1884; Schoultz, 1998).

En Guatemala, el país que quizás representa mejor este proceso, los cambios emprendidos a partir de 1946 se encaminaron en esa dirección. Como consecuencia del papel asignado al istmo centroamericano desde fines del siglo XIX en la división internacional del trabajo impuesta por el imperialismo, las desigualdades en la propiedad de la tierra eran sencillamente abismales.³ Las estadísticas mejor conocidas para dicha década son precisamente las de Guatemala donde existía una extraordinaria concentración de la tierra y del ingreso. El proceso de concentración de la tierra se había ido desarrollando de forma creciente desde la colonia, de acuerdo a los intereses de la clase dominante y en relación directa con la explotación de la población indígena y los cultivos de exportación. A comienzos de los años 50, mientras el 2% de los propietarios acaparaban más del 70% de la tierra cultivable, el 57% de los campesinos no poseían ninguna y un propietario extranjero, la United Fruit Co., aparecía como el mayor latifundista del país (Torres Rivas, 1981). La distribución de la propiedad en 1950 y en 1964, después de la primera ola de gran represión en Guatemala era así:

3. Sobre diferentes interpretaciones del concepto imperialismo, incluyendo alguna norteamericana de fines del siglo XIX, como la de Charles Conant, véase Etherington, 1984.

GUATEMALA. Distribución de la tierra. 1950-1964

Tamaño las fincas	Número de fincas %		Superficie %		Superficie cultivada %	
	1950	1964	1950	1964	1950	1964
1. Menos de 2 manzanas	47	44	3	3	13,1	7,2
2. De 2 a 5 mz.	29	31	6	7	16,8	12,2
3. De 5 a 64 mz.	22	23	19	23	25	22,6
4. Más de 64 mz.	2	2	72	67	45,1	58
Total	100	100	100	100	100	100

En aquel tipo de economía, el carácter concentrado de la estructura agraria estaba relacionado directamente con una correspondiente concentración en la distribución del ingreso.

GUATEMALA. Distribución del ingreso de propietarios de tierra

Tamaño las fincas	1947-48	1970
1. Menos de 2 manzanas	7,0	6,7
2. De 2 a 5 manzanas	15,5	10,7
3. De 5 a 64 manzanas	17,0	16,1
4. Más de 64 manzanas	60,5	66,5

Fuente: Paz, 1999. La manzana es una unidad de superficie que equivale aproximadamente a 0,7 Ha.

Este alto grado de concentración de la tierra y del ingreso en Guatemala –que se hacía especialmente grave por la existencia de una población indígena maya numerosísima con alto grado de marginación– era perfectamente extrapolable con ligeras diferencias a las otras naciones mencionadas del área y constituía uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país.⁴ La imposibilidad para la mayoría de la población de acceder al principal factor productivo les mantenía en una situación de pobreza, limitando las posibilidades de ampliación del mercado interno, de un mayor crecimiento del sector industrial, etc.

4. El concepto desarrollo será objeto de una reflexión al final del trabajo.

Pues bien, en Guatemala los gobiernos de J. J. Arévalo y de J. Arbenz, entre 1948 y 1954, —como es conocido— además de reconocer la libertad de organización política y sindical, y de legislar a favor de las grandes mayorías del país, abrieron la posibilidad de la libre competencia en el mercado capitalista (con construcción de carreteras, de una nueva central eléctrica, etc...) y, sobre todo, trataron de llevar a cabo una moderada reforma agraria para equilibrar en algo la estructura de propiedad de la tierra. Pero todo ello chocó con los monopolios norteamericanos y especialmente con la United Fruit Co. cuyos propietarios, al objeto de defender sus intereses, movilizaron sus contactos políticos en la CIA y en la Casa Blanca para que actuaran contra Guatemala acusándola de comunista. Y, en efecto, fueron precisamente los propios Estados Unidos bajo el Gobierno de D. Eisenhower los que se encargaron de organizar la invasión del país en 1954, violentando y frustrando la nueva andadura democrática guatemalteca (Toriello, 1991). Mientras tanto, en Honduras, El Salvador y Nicaragua se sucedían gobiernos militares, o civiles controlados por las fuerzas armadas que garantizaban la dominación de las clases dirigentes a las que se incorporaron sectores castrenses en tanto que componentes de la corporación militar (LaFeber, 1884).

En general, la dominación de las clases dirigentes se basaba, como ya se ha apuntado, en la concentración de la propiedad de la tierra, a lo que se añadía el acceso barato a mano de obra, mediante relaciones asalariadas o no, lo que quedaba garantizado merced al control de los recursos del poder y de la violencia. En el campo, en la Nicaragua de Somoza, pero también en El Salvador y Guatemala, se había ido creando un sector de agricultura de exportación relativamente tecnificado, con una mezcla de rasgos capitalistas tecnológicamente modernos y actitudes hacia la mano de obra que eran herederas de la oligarquía del XIX. Desde luego en la década de 1950 los países centroamericanos tenían una cierta tasa de campesinado con acceso al mercado, más alta en Guatemala y menos en El Salvador. Se trataba de un campesinado empobrecido o marginado por la expansión de las empresas capitalistas, que se venían beneficiando de sus tierras y de su trabajo.

Por otro lado venía creciendo el porcentaje de mano de obra asalariada, con bajos salarios y escasos, o nulos, derechos laborales, tanto en la agricultura como en la industria ligera que lentamente avanzaba en estos países. La burguesía capitalista, dependiente del exterior, no concebía un mercado interno fuerte y la masa de la sociedad básicamente proporcionaba mano de obra barata para la producción de la industria ligera nacional y, sobre todo, para la exportación. Algunos rasgos del moderno capitalismo se reflejaban en el tímido crecimiento de centros urbanos capitalinos, que contrastaban con el fuerte atraso en el campo (Guerra Burgos, 1992).

A pesar de la existencia de dictaduras no sólo en Centroamérica sino en el resto del continente, las oligarquías durante los años 1950 en América Latina estuvieron pidiendo a los Estados Unidos un mejor trato económico en las rela-

ciones comerciales y financieras con aquel país. Estas peticiones no eran hechas desde la óptica de los intereses de las mayorías sociales, sino en función de los intereses oligárquicos en sus negocios. Tales solicitudes se plantearon, por ejemplo, en las Conferencias de Ministros de Finanzas de la OEA en Petrópolis en 1954, o en la Conferencia Económica de Buenos Aires de 1957 sin que los gobiernos norteamericanos las atendieran (Espinoza García, 1971). Se diría que el ejercicio de fuerza realizado por los Estados Unidos en Guatemala en 1954 les servía para convencerles que detentaban un control indiscutible en la región.

Sin embargo, la represión en Guatemala a partir de 1954 por un lado, la persistencia de las estructuras extremadamente desiguales en Nicaragua, El Salvador y Honduras por otro (Costa Rica es caso aparte), y finalmente, la situación de América Latina en general en sus relaciones con el crecimiento económico internacional, fueron el caldo de cultivo en el que se gestaron los intentos de cambio que surgieron a comienzos de la década de 1960 ya por medios armados.

I. Los proyectos revolucionarios

La prolongación de la situación conflictiva en América Latina durante la Posguerra, es decir, la combinación de profundas injusticias sociales mantenidas por gobiernos oligárquicos autoritarios, no era exclusiva de América Central y se repetía en muchos otros países (recuérdense la dictaduras de F. Batista en Cuba, de Rojas Pinilla en Colombia, de M. Pérez Jiménez en Venezuela, R. L. Trujillo en República Dominicana por no mirar en otras direcciones del continente...). Pues bien, esta situación experimentó una violenta sacudida con la Revolución Cubana. Esta experiencia, en su contexto internacional, animó a diversas minorías en casi todas las naciones del continente a tratar de cambiar una situación insostenible de décadas por la vía armada, dado que los sucesivos intentos de cambio por medios democráticos y pactados se habían revelado imposibles.⁵

Tras años de haber desatendido las peticiones de mayor equilibrio en las relaciones económicas por parte de América Latina durante los años 50, en América Central los Estados Unidos reaccionaron ante la Revolución Cubana con una diversidad de iniciativas y una de ellas consistió en impulsar un Mercado Común Centroamericano. Ya desde 1951 estaba en marcha un proceso de integración económica en América Central conducido por la CEPAL que había avanzado en convenios comerciales bilaterales y comenzaba a hacerlo en el terreno de la coordinación industrial. Sin embargo, en el marco de la Alianza para el Progreso, en 1960 los Estados Unidos decidieron desplazar a la CEPAL e imponer su propia concepción integracionista para beneficio de los monopolios estadounidenses, creando en América Central un mercado común (M.C.C.A.) que, atrajera

5. Para una visión crítica de este proceso, Castañeda, 1995.

inversiones, animara el crecimiento industrial y el comercio regional, con el objeto de evitar que en la región se extendieran iniciativas como la cubana. Como apoyo a esta operación se crearon el Sistema de Integración Económica Centroamericano (S. I. E. C. A.) y el Banco de Integración Económica Centroamericana (B. I. E. C.). Sin embargo se trataba de un proyecto oportunista y descabellado que apenas duró una década porque (1) no se daban las condiciones económicas objetivas para que saliese adelante, con países básicamente agrarios con una extraordinaria concentración de la riqueza, con amplísimas capas sociales sin apenas poder adquisitivo, y sin infraestructuras industriales ni financieras adecuadas, y (2) porque ya se habían puesto en marcha los embriones de los proyectos revolucionarios, que comenzaban a producir en los países, por una parte, crecientes tensiones sociales y, por otra, durísimas represiones gubernamentales asesoradas por los mismos Estados Unidos.

Lo sorprendente del caso es que los economistas liberales, como V. Bulmer-Thomas, hayan analizado posteriormente este proceso prescindiendo por completo del panorama social y político de la región en aquellos años, que era ciertamente agitado y sin la cual no puede comprenderse la historia del MCCA (Bulmer-Thomas, 1987). En todo caso, los países más beneficiados relativamente de aquella operación fueron El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que antes de 1960 ya tenían un cierto grado de industrialización. Pero de todos modos, en el caso específico de El Salvador, aunque logró altas tasas de crecimiento durante los 60, éstas no fueron suficientes para reducir el desempleo que ya en las décadas anteriores y en estos mismos años estaba provocando la emigración de 300.000 campesinos sin tierras a Honduras. Esta presión demográfica dio como resultado conflictos fronterizos y enfrentamientos de las burguesías de ambas naciones que desembocaron en una breve guerra en 1969. El conflicto con Honduras resquebrajó el Mercado Común regional y la industria salvadoreña entró en crisis (Bulmer-Thomas, 1987: 224 y ss.).

Pero las estrategias económicas del capital tratando de atenuar las profundas desigualdades en la región por la vía de aumentar el tamaño del mercado y acelerar la acumulación de capital no pudieron impedir que, simultáneamente, de los conflictos internos que arrastraban los países centroamericanos surgieran los primeros proyectos de transformación social por la vía armada.⁶ Hagamos un rápido repaso de los mismos por países.

* * * * *

Nicaragua, probablemente por sufrir la más larga dictadura de la región fue, junto con Guatemala, el país donde más temprano surgió un rechazo al orden existente, que se remontaba a décadas atrás. En efecto, jóvenes que se habían formado en

6. Una interesante visión comparativa de la región desde las perspectivas económica y política hasta mediados de los años 80 se encuentra en Blachman, et al., 1986.

la oposición a la dictadura de los Somoza desde los años 50, fundaron en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F. S. L. N.)(Tirado López, 1985). A los iniciales componentes de este grupo, procedentes de las capas medias urbanas, se fueron añadiendo núcleos campesinos y obreros que se fueron ampliando lenta pero imparablemente. La dictadura de los hijos del primer Somoza, con el intervalo del gobierno títere de René Schick (1963–67), tuvo escasa oposición política hasta comienzos de los 70. Pero por entonces ciertos sectores de la burguesía nacional afectados por el expansionismo económico de Somoza constituyeron en 1974 la Unión Democrática de Liberación (U.D.E.L.) con diversas agrupaciones políticas y sindicales, más otros partidos políticos tradiciones (PSN, PLI, PSC) y comenzó a fracturarse la cohesión de la clase dominante. No obstante, como fuerza más activa de oposición se fue consagrando el FSLN que organizó un frente armado que mantuvo en jaque de forma creciente a la Guardia Nacional de la dictadura, al tiempo que el régimen y la economía del país se deterioraban a pasos agigantados.

De 1977 a 1979 tuvo lugar la fase final de la lucha contra la dictadura que reaccionó con una sangrienta represión, llegando a bombardear poblaciones civiles (Barahona, 1985: 71). En 1979 A. Somoza se enfrentaba no sólo al FSLN, sino también a una gran parte de la burguesía, al sector reaccionario de la Iglesia católica, con su antiguo amigo el cardenal Obando y Bravo al frente, y a los propios Estados Unidos. En esta situación, Washington abandonó finalmente al dictador, una vez que quedaba claro que no era útil para sostener los intereses económicos del capital internacional, en una táctica que ya había utilizado y utilizaría en el futuro con regímenes similares, como los de Batista, Duvalier o Trujillo.

Con el triunfo final, el FSLN implantó un régimen con un claro proyecto de transformación de las estructuras económicas a favor de los intereses de las amplias capas sociales marginadas por la expansión del capitalismo. El FSLN tenía originalmente en su creación un programa socialista. Pero sus vínculos con otras clases sociales durante la lucha contra la dictadura lo llevaron a organizar un Gobierno plural de Reconstrucción Nacional junto a representantes de otras organizaciones políticas, y al irse decantando el programa de gobierno a favor de la mayoría que el FSLN ostentaba y quedarse en solitario, el Frente llevó a cabo un programa que, teniendo claros ribetes socialistas distaba mucho de parecerse siquiera al de la Revolución Cubana, pese a la ayuda que Cuba prestó a la Nicaragua. En efecto, el gobierno sandinista nacionalizó la banca, así como el comercio exterior, pero sólo lo hizo parcialmente con la propiedad productiva y su reforma agraria afectó a poco más del 50% de la tierra, esto es, la vinculada a Somoza o sus allegados, mientras que grandes terratenientes de la oligarquía tradicional como la familia Pellas, la dueña del mayor ingenio de América Central, el San Antonio, y productora del ron “Flor de Caña”, que se habían mantenido al margen de las operaciones de Somoza, nunca fueron expropiados.⁷

7. La revolución sandinista no fue más compleja que cualquier otra, pese a la forma de denominarla de algún autor como Martí i Puig, 1997.

Guatemala era el país en que la represión política con participación directa de los Estados Unidos era más evidente desde la invasión de 1954 y, en medio de gobiernos militares corruptos, nació y se desarrolló el movimiento revolucionario armado. Ya desde 1954, bajo el régimen de C. Castillo Armas, financiado por la Agencia de Cooperación norteamericana (ICA) y el Banco Mundial, comenzaron las matanzas de campesinos y sindicalistas, los encarcelamientos, y el exilio en cantidades de decenas de miles. Después, sucesivos gobiernos militares mantuvieron al país sojuzgado por los Estados Unidos y en un agravamiento creciente de las condiciones socioeconómicas. Los partidos políticos que podían intervenir en política en los años 50 y 60 estaban en su mayoría vinculados por el Ejército —que se fue constituyendo en una poderosa corporación con intereses económicos—, mientras los sectores populares, organizaciones sindicales y asociaciones estudiantiles de oposición actuaban clandestinamente promoviendo una agitación nacional creciente (Holden, 2004).

A comienzos de la década de 1960 algunos militares influidos por la revolución cubana salieron del ejército y se instalaron en el Petén formando el MR-13 (Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre). Y éstos, poco después, se unieron con el P.G.T. (Partido Guatemalteco del Trabajo) para formar en 1962 el primer grupo guerrillero conocido como F.A.R. (Fuerzas Armadas Rebeldes). Ya en estos años la inestabilidad en el país era insostenible. Hacia mediados de la década la represión gubernamental había generado organizaciones clandestinas de ultraderecha, como M. A. N. O. (Movimiento Anticomunista Nacional Organizado) y N. A. O. (Nueva Organización Anticomunista), que llevaban a cabo numerosos asesinatos entre las capas populares y campesinas, mientras que, por otro lado, la izquierda ejecutaba a políticos y militares, incluyendo en 1967, a miembros de la embajada de los Estados Unidos y al propio embajador (Figueroa Ibarra, 1991; Jonas, 1991).

En la década de 1970, aunque hubo un importante crecimiento del PIB (hasta el 6% y 7% anual), así como una duplicación del valor de las exportaciones impulsadas por la explosión del mercado del café (cuyos precios crecieron en un 400%), y un ingreso de capitales extranjeros en la industria, el modelo económico de los gobiernos militares fue eminentemente conservador y benefició fundamentalmente al sector empresarial. La burguesía consiguió del Estado que la política fiscal, las leyes laborales y crediticias se subordinaran a los intereses de la empresa privada.

Mientras que bajo un aspecto de diversificación productiva y modernización económica se ampliaban las desigualdades sociales, políticamente se consolidaba la alianza del Ejército con los partidos políticos y sectores empresariales bajo una nueva fórmula de gobiernos electos siempre encabezados por militares. A la luz de la experiencia de los años anteriores, el Ejército afianzó la tecnificación y el reordenamiento de sus unidades militares, mien-

tras que nuevas organizaciones guerrilleras hacían su aparición, mejor entrenadas, equipadas y más organizadas en su estructura político-militar.⁸

En 1975 desde la oposición se creó el Ejército Guerrillero de los Pobres (E. G. P.); y en 1979, la Organización del Pueblo en Armas (O. R. P. A.) que redefinieron el enfoque estratégico con respecto a las organizaciones de los años sesenta. Esto implicó la selección de territorios distintos y un esfuerzo consciente por ampliar su base social, buscando la participación del pueblo maya en la lucha revolucionaria, por lo que el gobierno acentuó la represión creando un programa contra ellos, aumentando en gran número al ejército y poniendo bases militares en cada pueblo especialmente en el altiplano del país, acusando a cada grupo organizado, sindicatos, cooperativas, estudiantes, iglesia liberal, trabajadores etc. de ser guerrilleros, lo que era igual a ser comunista.⁹ En 1982 se produjo un avance en la organización de la resistencia y surgió la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (U. R. N. G.), integrada por varias de las organizaciones mencionadas, como el Ejército Guerrillero de los Pobres (E. G. P.), las Fuerzas Armadas Rebeldes (F. A. R.), la Organización del Pueblo en Armas (O. R. P. A.) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (P. G. T., Núcleo de Dirección Nacional). Los objetivos básicos más importantes de todos estos movimientos eran: la reforma agraria, el derecho a la salud, a la educación y, en general, el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas (uso del traje típico, idiomas mayas, religión, cultura, organización, etc.). La organización y el recurso humano de la guerrilla se produjo principalmente en las áreas rurales y con población indígena, con la promesa y esperanza de la solución de sus problemas, económicos, sociales y culturales.

De 1978 a 1982 especialmente con los gobiernos militares de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, sobre todo bajo este último, se llevaron a cabo actuaciones de matanzas selectivas (en la ciudad) y colectivas (en el área rural) por medio de programas conocidos como “Tierra Arrasada” y “Frijoles y Fusiles” dando como resultado el genocidio y etnocidio, desapariciones forzadas, y masivos desplazamientos interno y externo.

* * * * *

En El Salvador, desde 1948 hasta 1979 la vida política estuvo dominada por una sucesión de gobiernos militares que, aun con algunos rasgos populistas en ciertos casos de reconocimientos tutelados de derechos sociales -como el de la seguridad social por parte de Oscar Osorio, por ejemplo- mantuvieron en el país el control aplastante de la combinación oligarquía terrateniente-Ejército que ya venía controlándolo desde la tiranía de Maximiliano Hernández. Así los gobiernos de O. Osorio, J.M. Lemus, J.A. Rivera, F. Sánchez Hernández, A.A. Molina

8. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999.

9. *Ibíd.* p. 238.

y C.H. Romero, militares de diferentes tendencias dentro del Ejército, con alguna breve interrupción de Juntas y golpes de mano por facciones dentro de la misma institución, fueron generando creciente descontento, pobreza y emigración entre las clases populares.

A partir de la tradición del Partido Comunista de El Salvador, la lucha por la democracia y la justicia social que se fue gestando en estas décadas, cobró un gran impulso ya en los años setenta con el nacimiento de las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (F. P. L.) en 1970; el Partido de la Revolución Salvadoreña (P. R. S.), más conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo (E. R. P.), en 1972; la Resistencia Nacional (R. N.), como escisión del PRS, en 1975, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, constituido en 1976. Las diferentes formas de lucha armada, político-electoral, económica y social, desplegadas por separado por cada una de las cinco organizaciones durante la segunda mitad de los setenta, junto con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, en julio de 1979, y el estallido de la situación revolucionaria tras el golpe de estado en octubre del mismo año, estimularon la necesidad de la unificación de la izquierda revolucionaria.

Tras arduas negociaciones y las creaciones previas del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Democrático Salvadoreño (FDS) con la participación de muy diversas fuerzas sociales, en Octubre de 1980 fue creado el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), integrado originalmente por las cuatro organizaciones mencionadas arriba, a las que diciembre se incorporó el PRTC. Esta decisión precedió al lanzamiento de la llamada Ofensiva General del 10 de enero de 1981, con la cual comenzó el despliegue de la Guerra Popular Revolucionaria propiamente tal, que mantuvo la lucha contra los gobiernos oligárquicos apoyados por los Estados Unidos durante casi toda la década.¹⁰ La violencia en estos años fue intensa, pero merecen destacarse algunos de los numerosos asesinatos llevados a cabo por fuerzas paramilitares ultraderechistas como el del arzobispo de San Salvador, Monseñor O. A. Romero, en 1980; la matanza conocida como El Mozote, en 1981; o la de los jesuitas y otros civiles de la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989. Estas fuerzas estaban vinculadas, entre otros, a militares de extrema derecha como el tristemente famoso Roberto D’Aubuisson (fundador del partido ARENA) quien llegaría a ser elegido presidente por una asamblea constituyente en 1981, aunque su nombramiento fue vetado por un sector del Ejército y los propios Estados Unidos, cuando éstos decidieron apoyar oficial y coyunturalmente a una opción menos agresiva como era la Democracia Cristiana. En sustitución de D’Aubuisson fue presidente el banquero Álvaro Magaña, aunque el hombre fuerte de la Democracia Cristiana era J. N. Duarte quien fue presidente en dos ocasiones (1980-82 y 1984-89). Todo esto sucedía en medio de la gue-

10. FMLN, 2002.

rra (nunca declarada “de iure”) y de la convulsa y compleja política salvadoreña, cuyos matices no se pueden tratar aquí (Rojas, 1992).

* * * * *

Desde 1949 a 1956 Honduras tuvo dos gobiernos civiles, el segundo de ellos no democrático, que llevaron a cabo tímidas reformas institucionales y sociales tras la larga dictadura de Carías Andino. El primero, el de J.M. Gálvez (1949-54), ex-ministro de la Guerra de Carías, dio asilo a exiliados guatemaltecos durante la presidencia de J. Arbenz en Guatemala, entre ellos, al coronel C. Castillo Armas, y firmó un acuerdo militar con los Estados Unidos por el que se importó armamento y se organizó la invasión de Guatemala dirigida por Castillo. Por otra parte, tuvo que afrontar importantes huelgas de trabajadores de las empresas bananeras que concluyeron en represión. En 1956 se produjo un golpe militar, seguido del gobierno de R. Villeda Morales (1957-63), al que puso fin otro golpe militar cuando la situación social se hacía cada vez más conflictiva debido a las dificultades económicas por las que atravesaba el país que se había endeudado de forma importante con el F. M. I..

Con el general O. López Arellano de presidente (1965-71), en un principio no bien visto por los Estados Unidos pero pronto apoyado por el gobierno de L. Johnson, se iniciaron los regímenes militares y Honduras se vio cada vez más envuelta en un conflicto generalizado en la región, donde condiciones sociales y políticas iban empeorando a ojos vista. En estos años Honduras formó con Guatemala y Nicaragua, al que después se uniría El Salvador, el Consejo de Defensa Centroamericana (C. O. N. D. E. C. A.), un pacto militar conjunto con los Estados Unidos para la coordinación de actividades de contrainsurgencia. Y en 1969, tras un período de conflictos ya referidos anteriormente, se produjo la Guerra del Fútbol, entre Honduras y El Salvador que sirvió para distraer los problemas nacionales.

La dictadura militar consiguió reprimir las demandas campesinas y obreras por mejores condiciones de vida pero, a fines de los años 70, a la tradición de oposición democrática del Partido Comunista de Honduras, vinieron a sumarse algunos grupos guerrilleros, de menor envergadura que los de países vecinos y que aglutinaron núcleos menores dispersos hasta entonces. Así aparecieron el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos de Honduras (P. R. T. C. H.), en 1976 como parte de un partido regional; el Frente Morazanista por la Liberación de Honduras (F. M. L. H.), en 1980, tomando el nombre de Francisco Morazán, quien trató de unificar los estados centroamericanos en el siglo XIX; las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya (F. P. R. -L. Z.), en 1980, de inspiración pro-china y con el nombre de un líder campesino asesinado en 1865; o el Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros (M. P. L. C.), creado en 1981 e inspirándose en el nombre de un cabecilla campesino del siglo XIX. Con la excepción del MPLC que tenía unos 300 miembros, el resto de los grupos estaban formados por un centenar de participantes o menos.

En 1982 estos nuevos grupos se unieron al Partido Comunista de Honduras (PCH), bajo la estructura del Directorio Nacional Unificado-Movimiento de Unidad Revolucionario (DNU-MUR). El PCH, que había sido fundado en 1927, había sido el mayor grupo de oposición de izquierdas en el país durante la década de 1970, pero raramente había recurrido a la violencia antes de su afiliación al DNU-MUR. Una segregación del PCH que no formó parte del DNU-MUR fue el Partido Comunista Marxista-Leninista de Honduras (P. C. M. L. H.) formado en 1967 por disidentes del PCH (Rojas, 1992; Shultz y Shultz, 1994).

* * * * *

A fines de la década de 1970 en América Central, salvo en Costa Rica, había surgido una erupción generalizada de movimientos revolucionarios de carácter nacional, de diverso perfil político y también de diferente alcance pero que, en general, reclamaban el reconocimiento de los derechos democráticos de los sectores populares y la aplicación de programas políticos en mayor o menos medida inspirados en el socialismo. Como es sabido, el único caso en que tales propuestas pudieron llevarse a la práctica fue el del FSLN en Nicaragua.

II. La guerra y la derrota de los intentos de cambio

Pero en plena Guerra Fría los Estados Unidos no iban a permitir que una de las parcelas más estratégicas de su “patio trasero”, se les fuera de las manos. Cuando estaban en pleno esfuerzo por desestabilizar la economía soviética acelerando la carrera armamentista, según confesó el poderoso e influyente general Vernon Walters, los Estados Unidos no podían aceptar perder el control de la región de manos de los que ellos consideraban comunistas.¹¹ Por eso, la toma del poder de los sandinistas en Managua en 1979 significó un punto de inflexión en el conflicto y una intervención norteamericana mucho más intensa; en una palabra: la guerra, aunque no fuese declarada oficialmente.

Ahora bien, del lado de los Estados Unidos existían unos precedentes desde el punto de vista militar en la zona que se remontan al menos a 1950. En realidad su presencia en América Central nunca había sido escasa, pero a partir de 1950 y, sobre todo, después de 1979 se hizo mucho más vigorosa y visible. Las líneas a través de las que los Estados Unidos ejercieron su poder militar en América Central desde 1950 (además de las que ya habían desarrollado durante la II Guerra Mundial) fueron varias, aunque en realidad, como se verá después, el aspecto militar no era el único en el que los Estados Unidos basaban su hegemonía en la región.

11. El general norteamericano, que participó en diversos lugares y momentos claves de la Guerra Fría desde la CIA y como agregado militar de varias embajadas, declaró que esta estrategia fue decidida en la Casa Blanca en el gobierno de R. Reagan y que él mismo tomó parte en dicha decisión. Ver entrevista concedida a *El País* (Madrid) el 25-08-2000.

En el terreno militar, por una parte estaba la transferencia de material, entrenamiento y servicios de construcción bajo la forma de programas de ayudas, ventas y créditos que precisamente se iniciaron en Honduras y Guatemala en los años 50 y que incrementaron la deuda externa de éstos y de otros países conforme se fueron produciendo. Por otro lado estaban las misiones militares de asesoramiento tanto a los gobiernos, como directamente a los ejércitos de la región y sus tropas, así como a los cuerpos de policía, bajo programas de asistencia militar. Ello incluía, tanto transferencia de equipos y servicios, como la asistencia en el terreno de la inteligencia y comunicaciones de los ministerios de defensa centroamericanos. Aunque con características muy específicas y singulares, en este apartado podría incluirse la actuación del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos establecido en aquellos años en la Zona del Canal de Panamá, donde se encontraba también la Escuela de las Américas, que aceleró su siniestra actividad a partir de la Revolución Cubana (Nelson-Pallmeyer, 1997).

Y, por último, entre las líneas de actuación militar, estaba el estacionamiento semi-permanente de entre 2.000 y 5.000 hombres en Honduras como una base de gran escala de las actividades militares norteamericanas en la zona. Distribuidos en varios puntos, pero teniendo como centro principal la base aérea hondureña de Comayagua, desde los comienzos de la década de 1980 estas fuerzas desarrollaron labores de inteligencia, comunicaciones y apoyo a las campañas de contra-insurgencia del ejército salvadoreño, además reforzaron las medidas de contra-insurgencia en la propia Honduras y, finalmente, dieron apoyo logístico tanto a las fuerzas anti-sandinistas con base en Honduras (lo que coloquialmente se llamaba "la contra"), como a los ejercicios militares de hasta 10.000 efectivos regulares y de la Guardia Nacional temporalmente desplegados en aquel país (Holden, 1993).

América Central no era excepcional en este aspecto militar, sino que formaba parte de la estrategia de la seguridad global de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero no cabe duda de que, desde los años 50 y especialmente en los 80, la región se convirtió en un campo de batalla en el que se confrontaron intereses de clases, posiciones ideológicas y concepciones militares. Y en esta batalla, por expresarme en estos términos, los intereses que representaba el gobierno de los Estados Unidos reforzaron su alianza con los de las burguesías nacionales centroamericanas para prevenir cualquier cambio económico y social que pusiera en peligro las bases del funcionamiento del sistema capitalista internacional.

Desde la perspectiva de los gobernantes norteamericanos, en los años 50 la estrategia general para América Latina estaba influida por las preocupaciones del Congreso y el Departamento de Estado en el establecimiento de dictaduras fieles en la región, y se proponía abiertamente construir fuerzas capaces de repeler un ataque de una potencia no hemisférica, esto es la URSS. Pero, en los años 70, cuando se detectó una amenaza militar interna en Centroamérica en

forma de rebeliones locales, el temor de los Estados Unidos de verse vinculados con gobiernos que pudieran usar su apoyo militar contra las propias poblaciones civiles tuvo que ser superado invocando sutilmente el fantasma del “castrismo”. Y, así, la doctrina de la contrainsurgencia fue utilizada para controlar la selección de las armas, el entrenamiento y el apoyo desde la retaguardia. Pero la contrainsurgencia sería sustituida, a su vez, en los años 80 por la doctrina del “conflicto de baja intensidad”, diseñada para acoger un rango mucho más amplio de estrategias no convencionales, incluyendo el apoyo a la propia contrainsurgencia contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

Si en términos generales, la contención del comunismo constituía la idea de fuerza que guiaba el despliegue militar norteamericano durante la Guerra Fría, en América Central y el Caribe dicha idea encajaba con el objetivo tradicional de los Estados Unidos en la región, que era mantener su hegemonía. En la medida en que esta hegemonía se entendía que estaba en peligro por los deseos de cambio de amplias capas de la población en la región, estas amenazas eran identificadas en aquellos años como comunistas, no importaba si lo eran o no. Nada importaba el hecho de que antes de que el comunismo hiciera su aparición en la región, así como mucho después de la caída de la URSS, los Estados Unidos ejercieran y siguieran ejerciendo su hegemonía en el área, aunque con distintos instrumentos (Holden, 1993).

El período entre 1950 y 1990 se puede dividir en tres etapas que corresponden a las variaciones reales del monto de la ayuda económica militar que los USA prestaron a los países de la región. El primer período, entre 1950 y 1961 se abre con los orígenes del programa de asistencia militar en un intento de aislar a Guatemala y de garantizar el control de los Estados Unidos, y termina con el giro en el énfasis estratégico hacia la contrainsurgencia. El segundo período, 1962-79, incluye el apoyo a la contrainsurgencia de los 60 y la decisión de sustituir lo que hasta entonces eran mayoritariamente ayudas por ventas de material militar y servicios en los años 70. Y finalmente, el último período, desde 1980 a 1990, se diferencia tanto por el extraordinario auge de transferencias en armamento, como por la adopción de la nueva doctrina estratégica del “conflicto de baja intensidad”. En los 80, la década que cerró la Guerra Fría, Washington entró directamente en los conflictos de Nicaragua y El Salvador, emprendió un programa masivo de intervención preventiva en Honduras, y continuó dirigiendo y abasteciendo las fuerzas armadas de Guatemala en el más largo y sangriento de todos los conflictos de la región.

En términos de millones de dólares constantes de 1990, la asistencia militar proporcionada por los Estados Unidos a los países centroamericanos, que se completa con las compras de armamento y otro material de origen norteamericano pero por la vía privada, ascendió a 2.550.031.300, y para este cálculo no se han podido utilizar todas las fuentes oficiales norteamericanas. Es por lo tanto una subestimación y su desglose es el siguiente

	Ayuda militar oficial	Otras compras comerciales de material US	Ayuda militar indirecta
1950-61	58.679.000		
1962-79	487.105.000		
1980-90	1.870.635.000	46.908.000	
Total	2.416.419.000	82.623.000	50.989.300

Fuente: Holden, 1993.

Pero, como ya se advirtió, la ayuda y la presencia militar no eran el único vector sobre el que se basaba la actuación de los Estados Unidos en la región. Desde la caída de A. Somoza y con la presidencia de R. Reagan los Estados Unidos ampliaron el significado de la doctrina de la “seguridad nacional” (de “su” nación) y desplegaron una estrategia múltiple especialmente contra Nicaragua aunque también, y en la medida en que correspondía, contra la guerrilla y los sectores populares de El Salvador, Guatemala y Honduras.¹²

Dicha estrategia múltiple comportaba: (1) asesoramiento y formación en la denominada “contrainsurgencia”, incluyendo terrorismo y tortura; (2) campañas diplomáticas y de prensa internacionales; (3) agresión económica, incluyendo bloqueo en el caso de Nicaragua; y, finalmente, (4) acción militar directa e indirecta. Ésta última tuvo lugar durante casi una década desde mar y tierra contra Nicaragua, usando como plataformas los territorios de Honduras y Costa Rica.

En lo referente a la agresión marítima a Nicaragua, el incidente más grave fue el ataque al puerto de Corinto, en la costa del Pacífico, que era el más importante del país y por el que Nicaragua recibía la mayor parte de sus suministros, incluyendo hidrocarburos. Esta fue una acción flagrante que el gobierno de Nicaragua denunció ante el Tribunal Internacional de La Haya, que en 1986 condenó abiertamente a los Estados Unidos por una agresión injustificada a una nación soberana. Lejos de que dicha condena surtiera ningún efecto, por el contrario, los Estados Unidos ignoraron la indemnización establecida en la sentencia y, cuando la ONU se pronunció sobre la obligación de cumplir las sentencias de los tribunales internacionales, los Estados Unidos vetaron la resolución con el apoyo de Israel y El Salvador, y continuaron con su política de agresión contra el país centroamericano (Favor, 1989).

En el caso de la acción terrestre desde Honduras, país que fue calificado por un analista como “la república alquilada” (alquilada por los Estados Unidos) (Selsner, 1983), tropas mercenarias eran entrenadas por fuerzas norteamericanas, de forma abierta y reconocida, y lanzadas al interior del territorio nicaragüense donde llegó a haber, desde 1984, hasta 15.000 invasores armados llevando a cabo atentados y acciones de sabotaje económico. Estas actuaciones suenan lejanas y parecen de menor importancia a la luz de lo que sucede en nuestros

12. Sobre la doctrina de la “seguridad nacional” y América Latina, ver Schoultz, 1987.

días en Afganistán e Irak, pero fueron moral y humanitariamente tan graves como las actuales. Y resulta que hay datos que vinculan las acciones de entonces a las de hoy y que, en palabras de alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como G. Soros, convierten a los Estados Unidos en un país peligroso.¹³

Es conocido que los Estados Unidos construyen hoy su mayor embajada en el exterior, que albergará hasta 3.000 efectivos y que ésta se encuentra en Bagdad. El que ha sido su embajador en Bagdad se llama John Negroponte, quien en febrero de 2005 fue nombrado Director Nacional de Inteligencia en su país. También es sabido que Negroponte fue hasta 2004 el representante de los Estados Unidos en la ONU. Pero lo que es menos recordado es que Negroponte fue el embajador de su país en Honduras entre 1981 y 1985. El conocido entonces como el “pro-cónsul” estuvo directamente involucrado en la guerra sucia de Estados Unidos en Centroamérica y en el escándalo “Irán-Contra”, que tuvo lugar bajo el gobierno de R. Reagan, y que fue objeto de un juicio en Estados Unidos cuando se desvelaron las sorprendentes actuaciones de la Casa Blanca en la dirección de esta acción ilegal. Por haber tenido la habilidad de escapar a las consecuencias de dicho juicio, en el que O. North y otros fueron condenados y suspendidos para el ejercicio de cualquier empleo público, Negroponte fue considerado un traidor por los culpados y su figura quedó decididamente marcada. Pues bien, el actual presidente G. Bush de los Estados Unidos recuperó no sólo a Negroponte, sino también a otras figuras similares de los gobiernos de R. Reagan y de su padre que representan lo más corrupto y tenebroso de la ya de por sí terrible política norteamericana, y lo situó en el centro de otra escandalosa operación como fue la invasión de Irak.¹⁴ Con estos antecedentes no es sorprendente que los Estados Unidos, con un simplismo impropio de la primera potencia mundial, o quizás propio de un país con pretensiones imperiales que ignora y desprecia culturas ajenas, hayan considerado que la experiencia de El Salvador en los años 70 y 80 podría servir como antecedente para la estrategia a aplicar en Irak frente a la resistencia que lucha contra la ocupación norteamericana en vísperas de las elecciones de 2005.¹⁵

Regresando al caso de los ataques contra Nicaragua, desde Costa Rica se produjeron también situaciones bochornosas desde el punto de vista de la política internacional que, posteriormente, han sido olvidados gracias a la fuerza de los intereses norteamericanos en la escena mundial. Así, pese a la declaración de “neutralidad activa” del presidente costarricense Oscar Arias al llegar al poder en 1986, el territorio de su país siguió siendo utilizado igualmente por los Esta-

13. Según Soros, la tendencia a aplicar respuestas simples a problemas complejos asemejan al actual gobierno de los Estados Unidos a regímenes dictatoriales. Ver entrevista concedida por G. Soros a *El País* (Madrid), 14-04-2004.

14. Además de a Negroponte, G. Bush recuperó entre otros a Otto Reich y a Elliott Abrams. Entre la mucha literatura que despertó esta decisión, ver Martin, 2001. Sobre el juicio Iran-Contra, ver *Final Report...* 1993.

15. Ver *El País* (Madrid), 25-01-05.

dos Unidos para organizar ataques contra Nicaragua. Y esta colaboración de Oscar Arias con los Estados Unidos, además de su papel de impulsor de las conversaciones de paz que conducirían al desarme de los movimientos revolucionarios en América Central, le supuso a Oscar Arias el Premio Nobel de la Paz en 1987.¹⁶

Mientras se intentaba todo para acabar con el gobierno de Nicaragua, en El Salvador los ataques del FMLN obligaron a la burguesía y a los asesores norteamericanos a emplearse con dureza para reprimir a la guerrilla en medio de conflictos políticos internos en el poder, donde la Democracia Cristiana, algo más liberal aunque no exenta de vinculaciones con la represión, luchaba por hacerse un hueco frente a los sectores más reaccionarios. En Guatemala, por su parte, la violencia continuó de forma prácticamente indiscriminada provocando la mayor catástrofe humana de la región. Al finalizar la década de los 80 las cifras sobre los afectados por la guerra y la represión en Guatemala no por conocidas son menos impresionantes. La Comisión de la Verdad, en su informe concluido en 1999 estableció la existencia de 130.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos 1.000.000 de desplazados internos, 500.000 refugiados en México, 50.000 viudas, 250.000 niños huérfanos y 440 pueblos desaparecidos.¹⁷

Pero si los años 80 fueron los de mayor agudeza en la guerra centroamericana, también es cierto que en medio de dicha tensión se estaba generando el final de los enfrentamientos y en unas tres décadas se produciría la derrota (militar y política) de los intentos de cambio principalmente por la acción combinada de estrategias que ya se mencionaron antes. Sin embargo, con la derrota no desaparecerían las desigualdades ni la marginación que habían dado lugar al conflicto por lo que, pese a las conversaciones de paz, éste se cerraría en falso. En 1990 los gobiernos centroamericanos habían abandonado cualquier iniciativa de reforma agraria o de nuevos programas gubernamentales de bienestar social para ayudar a los pobres, lo que quedó reflejado en la Declaración de Antigua del mismo año (Chomsky, 2001: 261 y ss.). En el frente diplomático, la retórica de la paz fue impuesta en el discurso por los intereses dominantes internacionales sobre cualquier otra posible y también necesaria, como podría haber sido la de la justicia social, la ética política, el rechazo a la intervención extranjera en la zona, o la reducción de las oligarquías antidemocráticas y represivas. No obstante, imponiendo la denominada “búsqueda de la paz”, los intereses de los Estados Unidos, a los que se sumaron otros internacionales, condujeron a gobiernos, organizaciones y otros agentes sociales centroamericanos a una serie de conferencias para tratar de dar fin a lo que se llamaba conflicto armado, que no era más que una guerra de baja intensidad no declarada contra los sectores populares y progresistas de la zona, que ya estaban “de facto” derrotados.

16. Una biografía no interesada de O. Arias se puede encontrar en CIDOB (2003).

17. *Comisión para el Esclarecimiento*, 1996.

Ya desde 1983 trabajaba por la paz el llamado Grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá), y en enero de 1987 O. Arias convocó en San José a los presidentes de Honduras (J. Azcona), Guatemala (V. Cerezo) y El Salvador (N. Duarte), en lo que sería el precedente de la reunión de Esquipulas II, en septiembre del mismo año, con la participación de los anteriores más la de D. Ortega (Nicaragua). El acuerdo de Esquipulas II preveía el final de los enfrentamientos y el cese la ayuda abierta o encubierta de todo tipo (militar, logística, financiera o propagandística) bien a los “contras” –guerrilleros financiados y armados por los Estados Unidos para luchar contra Nicaragua-, bien a las guerrillas autóctonas en cada uno de los países. Pero ni Esquipulas II, ni el acuerdo de Sapoá de 1988 fueron respetados en realidad por los Estados Unidos, que mantuvieron su política de desestabilizar, por una parte, a Nicaragua y de sostener el terror en El Salvador y Guatemala, desde sus bases de operaciones militares de Honduras y Costa Rica.¹⁸

El proceso en estos términos lógicamente fue lento y la primera paz precisamente se produjo en Nicaragua con la derrota del FSLN en 1990, en las segundas elecciones democráticas que convocaba el régimen sandinista, cuando la población decidió cambiar de gobierno tras el continuo ataque terrorista en el interior, y la agresión y la amenaza en las fronteras que impidieron dedicar los escasos recursos disponibles a reorganizar el país. Mientras tanto, en El Salvador y en Guatemala los sectores gubernamentales alargaban interminablemente las conversaciones por la falta de voluntad de los partidos conservadores en ceder en el terreno de los principios democráticos, que no se cerraron sino hasta 1992 y 1996 respectivamente, cuando los principales grupos guerrilleros (FMLN y la URNG) se convirtieron en partidos políticos y aceptaron participar en la democracia.

La década de 1980 en América Central unió a los efectos de la crisis económica internacional, los de una salvaje represión llevada a cabo por las oligarquías nacionales, junto a los Estados Unidos, para impedir transformaciones sociales y económicas que mejorasen la situación de las mayorías en los países de la región. La situación económica a fines de la década, cuando los proyectos revolucionarios habían sido abortados, incluyendo el del gobierno de Nicaragua, era terrible. La producción y el comercio habían sido afectados profundamente, los indicadores económicos habían caído de forma estrepitosa y la deuda externa había crecido de manera notable. Pero en todo caso las clases propietarias continuaban en el poder y las expectativas económicas de los gobiernos salidos de unas injustas conversaciones de paz se cifraban en la ayuda que los Estados Unidos habían prometido una vez que se restaurara la democracia.

18. *Ibíd.* pp. 108 y ss.

III. El Neoliberalismo dependiente

Pero el nuevo gobierno de G. Bush en 1989 no cumplió tales expectativas y, lejos de recibir las ayudas económicas necesarias para superar la angustiosa situación económica, los países centroamericanos recibieron desde los primeros años 90 las políticas neoliberales que comenzaban a extenderse por el mundo. Y es que, como se ha visto en el terreno militar –y sucedía igualmente en el ámbito civil–, durante los años de la guerra en la región los Estados Unidos habían canalizado su asistencia a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), y lo habían hecho de forma bilateral y masiva hacia El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, mientras que habían vetado nuevos préstamos a Nicaragua por parte del Banco Mundial y del BID.

Pero una vez derrotados los intentos de cambio en la región y reconducidos hacia el espacio de la política tradicional los partidos políticos en que habían derivado los proyectos revolucionarios, los Estados Unidos disminuyeron su asistencia bilateral y fue la banca multilateral la que retomó su papel de principal agente financiero de la inversión pública en América Central; eso sí, orientando el crédito hacia las nuevas reformas de gran alcance que estaban siendo dictadas por el FMI, en una especie de división del trabajo conjuntamente con el Banco Mundial y el BID.

El siguiente cuadro refleja el cambio que experimentó el crédito multilateral durante los dos quinquenios en que se produjo la inflexión referida:

Centroamérica: Montos de los préstamos concedidos por el Banco Mundial y el BID (en millones de dólares)

	1986-90	1991-95
El Salvador	328,4	1.491,3
Guatemala	305,1	535
Honduras	496,6	956,4
Nicaragua	0	1.034,9
Costa Rica	753,1	915,6
TOTAL	1.883,2	4.934,4

Fuente: Rosa y Peña, 1995.

Y es que los intereses dominantes en el capitalismo internacional, por medio de sus instrumentos institucionales (FMI, BM, BID...) comenzaron a aplicar a los países de la región los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).¹⁹ Pero ¿con qué objetivos? Pues como la mayoría de los países en desarrollo que debían miles de millones de dólares a Estados Unidos, Europa y otras financieras extranjeras, las naciones centroamericanas fueron forzadas a participar en los Programas de Ajuste Estructural cuyo enfoque se ponía en la reducción de la deuda externa y, supuestamente, en el estímulo del crecimiento y en la provisión de la ayuda necesaria para el desarrollo. Pero para alcanzar estas metas los Planes de Ajuste incluían severos objetivos de austeridad que, en el caso de América Central, se imponían a una región destrozada por la guerra por lo que, en la práctica y como se podía esperar, han producido efectos sociales más negativos que positivos, como ha sucedido en realidad en la mayoría de las regiones del mundo en que se han aplicado.

Con respecto a la deuda, como es más que sabido, creció extraordinariamente en los años 70 y 80 más como consecuencia de los intereses de los países ricos y sus bancos que de los intereses de los países pobres, y la paradoja es que como se puede comprobar en el cuadro siguiente, el neoliberalismo con sus Planes de Ajuste y sus nuevos créditos ha terminado incrementando la deuda externa, con la pretensión de estar aplicando fórmulas para reducirla (Ferstenfeld, 1999). Salvo en el caso de Nicaragua que, por razones diplomáticas y no económicas pudo reducirla, la deuda en los demás países se ha comportado así

DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL (en millones de dólares)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Costa Rica	3.209	2.809	2.640	2.872	3.057	3.151	3.243	3.338	3.703
El Salvador	2.166	2.517	2.689	2.645	2.789	2.831	3.146	3.587	4.687
Guatemala	2.947	3.026	3.197	3.618	3.831	3.929	4.100	4.200	4.548
Honduras	4.243	4.121	4.073	4.369	4.691	4.711	4.757	4.922	5.122
Nicaragua	10.246	6.054	5.001	6.287	5.049	6.660	5.374	6.363	5.096

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de cifras oficiales

En el fondo, el objetivo de los Programas de Ajuste Estructural, en esta era del capitalismo globalizado ha sido crear las mejores condiciones posibles en las economías nacionales para que el capital ampliase sus tasas de ganancia. La

19. En el caso de El Salvador ver *El impacto*, (1998). Un buen análisis sobre el tema, aunque trate de otro país, es el de González de Olarte, 1998.

fórmula que incluyen los Programas es bien conocida a estas alturas. En principio se trataba de llevar a cabo una profunda reforma del Estado, tratando de reducir la magnitud de su aparato, en una lógica que buscaba estrechar los vínculos de las economías nacionales con la economía mundial y maximizar los espacios para el funcionamiento de los mecanismos del mercado. Y ello ha sido así aunque haya supuesto pagar salarios muy bajos, utilizar métodos de producción destructivos, desplazar a amplios sectores de la sociedad o simplemente mantener a otros en la marginación.

Una parte concreta de la fórmula de los Programas (de los que a algunos países centroamericanos se les ha aplicado más de una edición) ha sido una intensa política de privatizaciones de empresas del sector público, con las consiguientes reducciones de plantillas llevadas a cabo por el capital privado para hacer rentable la explotación de las empresas. Se suponía que los ingresos producto de las ventas debían ir a cubrir parte de la deuda externa, aunque ello no ha sido siempre así. Por países, en Nicaragua el proceso privatizador comenzó con el gobierno de Violeta Barrios que inició el desmantelamiento del sector público del Estado sandinista y, aunque la prima de riesgo del país era alta, se privatizaron empresas productivas y de servicios, y el proceso continuó de manos de Arnoldo Alemán, el presidente corrupto al que los Estados Unidos respaldaron mientras estuvo en el poder. Hoy día queda poco por vender en Nicaragua.

El Salvador, por su parte, vendió las más importantes compañías eléctricas, como CAESS, Del Sur y Santa Ana, a capital venezolano y norteamericano, así como la empresa de telecomunicaciones Antel y el Banco Ahorromet al Banco Nova Scotia, de Canadá. En Guatemala, el presidente Alvaro Arzú, un perfecto neoliberal, vendió entre otras empresas el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), la empresa nacional de la ferrocarriles Fegua y la eléctrica Egas, entre otras. Honduras, finalmente, vendió la telefónica Hondutel y otras empresas de servicios. Todo este proceso, como es sabido ha ido en paralelo con lo sucedido en toda América Latina (Eduviges Rivas, 1998).

Una derivada de las privatizaciones e importante en los Planes de Ajuste ha sido la flexibilización del mercado laboral en el que, como consecuencia de las facilidades dadas a la ampliación del sector privado y las reducciones de plantillas, se ha producido también un descenso en términos reales de los salarios o, en otras palabras, del precio de la mano de obra. Entre los muchos reflejos de esta realidad está la maquila, destacando en ella los textiles, en zonas fiscales o zonas francas, donde la fuerza de trabajo está desprovista prácticamente de toda protección laboral. La maquila ya existía en Centroamérica en la década de los 70, pero se trataba de un fenómeno económicamente testimonial. Sin embargo actualmente, con la penetración de las políticas neoliberales, representa un peso variable pero importante en las fuentes de divisas de los países centroamericanos, gracias a las favorabilísimas condiciones fiscales que se aplican al capital. En Centroamérica, como en otras regiones, existen operando en

la maquila, además de capitales nacionales, inversores de Corea, China, Taiwán, Estados Unidos, Hong Kong, Francia, Suiza o Chile, entre otros orígenes. Y, por poner un ejemplo, en un país como El Salvador, la maquila supone en estos años casi el 20% de la entrada de divisas al país.²⁰

Otro componente central de los Programas de Ajuste es la liberalización de los sistemas bancario y financiero nacionales. Como ya se indicó, los países centroamericanos se han aplicado a esta directiva pero en varios casos, las respectivas burguesías de los países del área han llevado a cabo escandalosos fraudes, conduciendo a la quiebra a varias instituciones bancarias. Especialmente grave ha sido el caso nicaragüense donde hasta tres de los más importantes bancos del país: Bancampo, Banades y Baninter, fueron quebrados en los años 90 por abusos de autocréditos y desfalcos de sus propios mayores accionistas, algunos de los cuales eran ministros de gobiernos. Y es que este neoliberalismo dependiente, que ni siquiera ha reducido la deuda externa real, ha sido por otra parte una pantalla que ha servido para que a amplios sectores de las burguesías de aquellos países, a cambio de aplicar los citados Programas, se les haya permitido continuar con prácticas de corrupción en las que ya tenían una gran experiencia.

La acción de los PAE se ha complementado por parte del capital internacional con los grandes esfuerzos realizados —y que siguen en curso— en el terreno de la integración comercial, lo que se ha traducido en un darwinismo económico en el que el capital ha sacrificado intereses de amplios sectores sociales de los países en aras de la ampliación de los mercados. A partir del Sistema de Integración Centroamericana, se ha constituido entre 1996 y 2000 una Unión Aduanera entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, dentro de la cual se avanza en la armonización arancelaria regional. Y sobre esta base institucional, el comercio intrarregional ha venido experimentando un crecimiento de 12% anual, por un valor total a comienzos de este siglo de 2.600 millones de dólares. Los países que más fuertemente participan en el mismo son, tanto en compras como en ventas, Guatemala seguido de El Salvador. Y en cuanto al comercio extrarregional, tanto en exportaciones como en importaciones, el principal comprador y vendedor son los Estados Unidos con un 43% de participación en ambos casos. Pero además, en el gran mosaico de convenios comerciales internacionales existentes, Centroamérica tiene firmados acuerdos con los países del Caribe, con México y, parcialmente con los Estados Unidos.²¹

Pese a lo resumido de esta exposición y a que el PIB ha venido creciendo entre el 2% de El Salvador y algo más del 4% en Honduras y Nicaragua, hay suficientes datos que apuntan a lo que es una realidad en Centroamérica, incluyendo a Costa Rica en esta observación, y es que el resultado de las políticas neoliberales ha sido

20. Membreño y Guerrero, 1994; Organización Internacional del Trabajo, 1997; Wolf Herrera et al, 2003.

21. SIECA, *Dirección General de Informática. Boletines 9.1 y 9.2, y Series Estadísticas Seleccionadas*, 30.

el ensanche de la brecha social en todos los países, es decir, que los ricos son cada vez más ricos mientras que la población viviendo bajo la línea de la pobreza apenas se ha modificado. Incluso aunque en algún caso los resultados económicos en términos técnicos están siendo positivos a los ojos de los economistas liberales –como sucede en El Salvador en determinados aspectos– ello sucede a base de fuertes costes sociales, uno de más importantes de los cuales es la emigración.

América Central –salvo El Salvador– es una región no muy densamente poblada, pero el flujo de emigrantes hacia el exterior y básicamente hacia los Estados Unidos se ha acelerado en estos últimos años. No obstante conviene destacar que existen también otros destinos migratorios intrarregionales, menos importantes pero muy significativos, como es el de los nicaragüenses que pasan a Costa Rica y que son empleados como mano de obra absolutamente marginal, en gran cantidad en la agricultura. Ahora bien, el componente más importante de la emigración centroamericana es el de los salvadoreños hacia el norte. El Salvador tiene en la actualidad unos 5.800.000 habitantes dentro de sus fronteras y en los Estados Unidos se calcula que haya unos 2.500.000, es decir, más del 40% de su población total. Es cierto que la concentración de la propiedad de la tierra y las crisis económicas ya provocaron una emigración apreciable desde hace años. Recuérdese que hacia 1969, cuando la guerra con Honduras, se calculaba que había unos 300.000 salvadoreños en el país vecino, pero la dimensión del fenómeno actual es extraordinaria, como consecuencia de la elevada tasa de paro y de la pobreza de las familias salvadoreñas.

Ahora bien, la emigración tiene otra cara de carácter económico que son las remesas enviadas por los emigrantes al país y que actualmente suponen nada menos que el 13% del PIB. Ya en la década de los 90 la cantidad de remesas se había incrementado, tanto así que eran equivalentes a un 108% de las exportaciones totales superando en casi tres veces el valor de las exportaciones agrarias tradicionales, con lo que se lograba el sostenimiento de la economía. Por otro lado a finales de los 90 se aplicó una política monetaria de importantes consecuencias que fue la “dolarización”, política monetaria que encontró condiciones favorables, gracias a la constante entrada de dólares que ha permitido la política de cambio fijo por ocho años, cosa que hubiera sido imposible sin un flujo anual de divisas. La importancia del fenómeno de las remesas se puede apreciar con algún detalle en el cuadro siguiente:

El Salvador. 1980-2000. Remesas familiares en millones de dólares

Año	Remesas	% de exports.	% de imports.	% del PIB
1990	322	55,5	25,5	5,9
1995	1.063	105,8	37,2	12,2
2000	1.750	136,4	37,0	13,2

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Ahora bien, ninguno de los análisis que puedan hacerse sobre la economía de América Central será completo, ni reflejará toda la realidad si no se toman en consideración ciertos aspectos o características de las estructuras sociales de los países, que retroalimentan su situación de crisis por encima de las cifras. La primera de ellas es la existencia de un importante grado de desarticulación social, a veces acompañada de violencia, derivada de una u otra forma de la represión conservadora, así como de los años de guerra, y que se manifiesta en diferentes sectores de la sociedad. Por un lado están los descolocados procedentes de la lucha armada de los años de guerra. Probablemente los que más se hayan oído mencionar fuera de la región hayan sido los denominados “contras” de Nicaragua, ya citados anteriormente. Estos apenas recibieron los medios necesarios para reintegrarse en la sociedad y en parte se mantuvieron armados durante años y, hoy día, malviven dedicándose a cualquier actividad posible. En la misma línea, una evolución similar tuvieron otros militantes armados de otros movimientos revolucionarios en los demás países, pero también los desmovilizados principalmente del Ejército Popular Sandinista, una vez que sus efectivos se redujeron de 90.000 a unos 15.000 tras los acuerdos de paz.

Por otro lado, está la violencia de las bandas paramilitares de ultraderecha que han seguido actuando después de la firma de los tratados y de la entrega de las armas por parte de los movimientos revolucionarios. Este fenómeno ha sido –y todavía es– más importante en Guatemala y El Salvador, y en menor medida en Honduras, donde militantes de partidos de izquierda, de sindicatos, de organizaciones populares o de la misma Iglesia católica han venido siendo asesinados en estos años, prologándose el terror que ya conocen aquellas sociedades desde hace décadas. Todo ello es consecuencia de un cierre en falso de la crisis de la guerra en las conversaciones de paz, que dejaron intactos los motivos de injusticia por los que la sociedad centroamericana se había movilizad.

Una raíz diferente, derivada de la crisis económica es la marginación juvenil, que adquiere formas de pandillas al estilo norteamericano, en El Salvador y Honduras, por ejemplo, que actúan también violentamente, pero también heredera de la crisis económica es la marginación infantil, un horror en muchos lugares y ciudades de la región y que en Honduras, por ejemplo, en ocasiones también ha sido objeto de asesinatos de bandas ultraderechistas.

Sin pretender mezclar los problemas, pero formando parte de la misma realidad, se agudiza la degradación del medio ambiente. El agotamiento de los recursos hídricos, la deforestación salvaje en la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, o la degradación del suelo por los pesticidas en la agricultura comercial están deteriorando a ojos vistas la naturaleza centroamericana hasta grados en muchos lugares ya irreversibles.²²

Y todo esto conduce, concluyendo con ello estas páginas, a una reflexión acerca del concepto de desarrollo. El discurso imperante en nuestro mundo

22. Sobre los negocios en Estados Unidos en este terreno y su alcance, véase Feldman, 1989.

occidental, del que Centroamérica forma parte, insiste en que estos países están en vías de desarrollo, que deberían terminar por desarrollarse, que a eso se encaminan las políticas neoliberales que se les aplican y que, para cerrar el círculo, debe tratarse de un desarrollo sostenible, una de las últimas creaciones teóricas de estos años.

Pues bien, América Central no es una excepción a escala internacional de la crisis social y el deterioro por el que atraviesa, ni se encuentra excepcionalmente mal por algún motivo desconocido. La evolución que ha experimentado la región es resultado de decisiones tomadas por diversos gobiernos y consejos de administración de muchas empresas, de dentro y de fuera de la zona, con consecuencias fatales para millones de personas de la misma. Que los países de la región se encuentren entre los puestos 103 (de El Salvador) y 121 (de Guatemala) de un total de 177 países en la clasificación del PNUD del Índice de Desarrollo Humano en 2003 es simplemente el resultado de la insostenible evolución del sistema internacional hacia el llamado desarrollo. Y es que sencillamente lo que la cultura occidental llamó desarrollo en la segunda mitad del siglo XX en el contexto, los parámetros y los valores de su economía industrial y financiera, o es desigual e insostenible o simplemente no lo es, y la humanidad está comenzando a tener palpables evidencias de ello. De manera que el pretendido desarrollo sostenible es una contradicción en sus términos, si se considera el sistema económico internacional en su conjunto y en el largo plazo de su evolución. Dicho de otro modo, para que Noruega o Suecia ocupen los primeros términos en dicha clasificación, acumulando extraordinarios beneficios que redistribuyen entre sus respectivas poblaciones, tienen, entre otras muchas cosas, que esquilmar la población de ballenas de los océanos, o emplear los obreros de Rumania o Filipinas en condiciones de extrema precariedad laboral (que no podrían permitirse con sus obreros nacionales), como hace cierta conocida empresa escandinava para fabricar sus lindos muebles de diseño.

Bibliografía citada

- BARAHONA, A. (1985). *Estudio sobre la Historia de Nicaragua. Del auge cafetalero al triunfo de la Revolución*. Managua.
- BLACHMAN, M. et al. (1986). *Confronting Revolution in Central America. Security through Diplomacy in Central America*. New York: Pantheon Books.
- BULMER-THOMAS, V. (1987). *The Political Economy of Central America since 1920*. Cambridge: Cambridge University Press. (Versión en español en San José, 1989)
- CASTAÑEDA, J. (1995). *La utopía desarmada*. Barcelona: Ariel.
- CHOMSKY, N. (2001). *El miedo a la democracia*. Barcelona: Crítica.
- COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO (1996). *Guatemala, Memoria del Silencio. I*, Londres: AAAS Science and Human Rights Program.

- EDUVIGES RIVAS, J. (1998). *La triste historia de las privatizaciones en América Latina*. San Salvador.
- ESPINOZA GARCÍA, M. (1971). *La política económica de los Estados Unidos hacia América Latina entre 1945 y 1961*. La Habana: La Casa de las Américas.
- ETHERINGTON, N. (1984). *Theories of Imperialism: War, Conquest and Capital*. London: Barnes and Noble Books.
- FAVOR (1989). A — de Nicaragua. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Haya en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Lima: Instituto de Defensa Legal, 1989.
- FELDMAN, J. (1989). *Universities in the Business of Repression. The Academic-Military-Industrial Complex in Central America*. Boston: South End Press.
- FERSTENFELD, M. (1999). "La deuda estrangula al Tercer Mundo. 'Ajuste Estructural', tiempo de reforma". *Trabajador Católico de Houston*, Houston, Vol. XIX, nº 2.
- FIGUEROA IBARRA, C. (1991). *Guatemala: El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala*. San José: EDUCA.
- FINAL (1993). — *Report of the Independent Counsel for Iran-Contra Matters*. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit.
- FMLN (2002). *Origen del FMLN*. San Salvador: FMLN.
- GLEIJESES, P. (1991). *Shattered Hope. The Guatemala Revolution and the United States*. Princeton: Princeton University Press.
- GONZÁLEZ DE OLARTE, E. (1998). *El neoliberalismo a la peruana. Economía política del ajuste estructural, 1990-1997*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- GUERRA BURGOS, A. (1992). "El desarrollo económico". En Pérez Brignoli, H. ed. *De la Posguerra a la crisis. Vol V de Historia General de Centroamérica*, (E. Torres Rivas, coord.). Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario-FLACSO.
- HOLDEN, R. (1993). "The Real Diplomacy of Violence: United States Military Power in Central America, 1950-1990". *International History Review*, vol XV, nº 2, pp. 283-322.
- (2004). *Armies without Nations. Public Violence and State Formation in Central America. 1821-1960*. Oxford: Oxford University Press.
- IMPACTO (1998). *El — de los programas de ajuste estructural y estabilización económica en El Salvador*. Washington: SAPRIN.
- JONAS, S. (1991). *The Battle for Guatemala. Rebels, Death Squads and U.S. Power*. Boulder: Westview Press.
- LAFEBER, W. (1884). *Inevitable Revolutions. The United States in Central America*. New York-London: W.W. Norton.
- MARTÍ I PUIG, S. (1997). *La revolución enredada. Nicaragua, 1977-1996*. Barcelona: Los libros de la Catarata.
- MARTIN, P. (2001). "Iran-Contra Gangsters resurface in Bush Administration". *World Socialist*, (August), (wsws.org).
- MEMBREÑO, R y GUERRERO, E. (1994). *Maquila y organización social en Centroamérica*. Managua.
- NELSON-PALLMEYER, J. (1997). *School of Assassins*. New York: Orbis Books.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1997). *Informe de la Maquila en Centroamérica*. Guatemala: OIT.

- PAZ, M. J. (1999). *Crecimiento y desarrollo: la estructura económica guatemalteca en el periodo reciente*. Madrid: Departamento de Economía Aplicada I. Universidad Complutense.
- ROJAS, M. (1992). "La política". En: Pérez Brignoli, H. (ed). *De la Posguerra a la crisis. Vol V de Historia General de Centroamérica*, (E. Torres Rivas, coord.). Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario-FLACSO.
- ROSA, H. y PEÑA, J. (1995). "El Banco Mundial, el BID y la reforma económica en Centroamérica". *Prisma*, San Salvador, 14.
- SCHOULTZ, L. (1987). *National Security and United States Policy toward Latin America*. Princeton: Princeton University, Press.
- (1998). *Beneath the United States. A History of U.S. Policy toward Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- SELSER, G. (1983). *Honduras, república alquilada*. México: Mex-Sur Editorial.
- SHULTZ, M. y D. SHULTZ. (1994). *The United States, Honduras, and the Crisis in Central America*. Boulder: Westview Press.
- SIECA. *Boletines 9.1 y 9.2, y Series Estadísticas Seleccionadas, 30*. Dirección General de Informática. SIECA.
- TIRADO LÓPEZ, V. (Presentación) (1985). *Carlos: el eslabón vital. Cronología básica de Carlos Fonseca Jefe de la Revolución. 1936–1976*. Managua: Instituto de Estudios del Sandinismo.
- TORIELLO, G. (1955). *La batalla de Guatemala*. México: Cuadernos Americanos.
- TORRES RIVAS, E. (1981). "Guatemala: medio siglo de historia política". En: González Casanova, P. (ed.) *América Latina: historia de medio siglo*. México: Siglo XXI, vol. 2, pp. 139-173.
- WOLF HERRERA, M. et al. (2003). "Dinámica 2003 de la maquila en Centroamérica". *Rebelión*, 5 septiembre. (www.rebelion.org/economia/030905maquila.htm)